



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTES	Luz Amparo Zapata Hernández y otros
DEMANDADO	Hernán Darío Villa Restrepo
RADICADO	05266 31 03 002 2022 00275 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 3 de noviembre de 2022 el Juzgado 002 Civil del Circuito de Envigado resolvió negar el mandamiento ejecutivo de pago pretendido por Luz Amparo, Rodrigo de Jesús, María Fabiola, Gloria, Beatriz Elena, Margarita María, y Jorge Enrique Zapata Hernández y María Eugenia Zapata de González, frente a Hernán Darío Villa Restrepo.

Como fundamento de la decisión, el juez trajo a consideración que, como título de recaudo se presentó un acuerdo conciliatorio suscrito por los anteriormente mencionados y por Martha Cecilia Zapata Hernández, Lina María y Natalia Zapata Mejía, sin embargo, estas no figuran como demandantes en el asunto de la referencia, ante lo cual la parte ejecutante explicó que las tres personas en mención no tenían interés en hacer parte de la demanda en condición de acreedoras, lo que, según el juez, denota que el acta de conciliación no encuadra como título ejecutivo. Señaló que el mérito ejecutivo del acta va atado a que esta sea muy clara respecto al acuerdo, a la descripción total de los hechos, a las responsabilidades, a la identificación de las personas que participaron en el encuentro, en los mecanismos de seguimiento y cumplimiento para que el acuerdo se sostenga y se cumpla; pues particularmente, lo acordado debe ser claro, expreso y exigible.

Precisó que en este caso los ejecutantes allegaron un acta de conciliación en la que el demandado aceptó tener una deuda por la suma \$650'000.000, que pagaría el 5 de octubre de 2022; allí en la parte de "ACUERDO" no se detalló con quien se tenía la deuda ni a quien se pagaría, si se determinó que los convocantes aceptaban el acuerdo, pero condicionado a la pérdida de rebajas en caso de incumplimiento. Sin embargo, la pretensión se formuló por la suma de \$1.189'459.253, con intereses desde el 30 de junio de 2017 por la suma pendiente de pagar de \$500'000.000 y desde el 30 de abril de 2018 por la suma pendiente de pagar de \$600'000.000; aspectos no explicados en el acta de conciliación y que provenían del negocio causal, que es la promesa de compraventa de un lote de terreno.

Anotó que el acta presentada no es clara en cuanto a la cantidad de dinero que se pagará, en especial lo que corresponde a cada uno de los acreedores, pues la mayoría de ellos figura en el acta como beneficiario directo de una suma de dinero que el demandado debía por un contrato de promesa de compraventa, pero otros actuaron como representantes de uno de esos directos beneficiarios que se encontraba fallecido, por lo tanto, en el acta debió indicarse al menos en qué condición actuaba cada uno de los convocantes, cuánto se debía cancelar a cada citante de acuerdo con la condición en que actuaba y qué pasaría en caso de que posteriormente resultara otros beneficiarios del promitente vendedor que había fallecido.

En este sentido concluyó que, en el documento aportado como título para el cobro, la obligación no es clara, en especial en cuanto a lo que se le debe pagar a cada uno de los beneficiarios, sobre todo porque en este caso no se puede hablar de una obligación indivisible, pues la obligación que se cobra es perfectamente divisible y, por lo tanto, se requiere conocer qué se le debe a cada acreedor.

1.2. Inconforme con la decisión, la apoderada judicial del extremo procesal ejecutante presentó recurso de apelación, con el fin de que se revocara la misma y en su lugar se librara mandamiento ejecutivo de pago. Subsidiariamente pidió que, se ordenara la vinculación como litisconsortes necesarias de Martha Cecilia Zapata Hernández, Lina María y Natalia Zapata

Mejía, esto con el fin de cobrar la totalidad de la obligación contenida en el acta de conciliación.

Para tal efecto, explicó que en el título valor (acta de conciliación) constaba que la deuda total correspondía al valor de \$1.157'618.726, deuda derivada de un contrato de "*compraventa*", respecto del cual se hizo una rebaja a \$650'000.000 valor que debía ser cancelado el 5 de octubre de 2022, pero que, en caso de incumplimiento en el pago, se perdería las rebajas efectuadas y por lo tanto se podría cobrar el valor total de la obligación. Refirió que el deudor aceptó el monto adeudado a los acreedores convocantes, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1570 del Código Civil, son solidarios, por lo que no era necesario discriminar un valor específico por cada acreedor. Adicionalmente, señaló que en virtud del artículo 632 del Código de Comercio los acreedores o aceptantes del título valor (acta de conciliación) son obligados solidariamente a responder por las obligaciones contenidas en este, al haber suscrito el documento en el mismo grado, es decir, en condición de aceptantes.

Expuso que de conformidad con el artículo 785 del Código de Comercio, la parte demandante puede optar por accionar para la satisfacción del pago de la obligación frente a todos los obligados cambiarios en el mismo grado (deudores solidarios), o solamente frente a alguno de ellos, en razón de la solidaridad. Subsidiariamente expresó que en caso de no considerar aplicable la solidaridad, el *a quo* tenía la facultad de acceder a la integración del litisconsorcio necesario, al existir una sola relación jurídica de derecho sustancial entre todos los que actúan. Anotó que el deudor aceptó y reconoció en el acta de conciliación a la totalidad de convocantes como acreedores, bajo el entendido de que dos de ellos eran las hijas de uno de los acreedores, lo cual las hace acreedoras, sin que la ley exija que quede constancia de la condición en la que actuaban ni que la ausencia de esto invalide el acta de conciliación o se pueda considerar no exigible.

Finalmente, adujo que el acta de conciliación aportada cumple con los requisitos formales y sustanciales para ser considerada un título ejecutivo y que no es jurídicamente apropiado rechazar el libelo genitor si se tenía en cuenta que el pronunciamiento sobre la demanda ejecutiva, salvo por falta de

jurisdicción, puede ser para librar o negar el mandamiento deprecado, de ahí que el juzgado en primera instancia se encuentra equivocado.

1.3. En auto de 16 de noviembre de 2022 el Juzgado 002 Civil del Circuito de Envigado concedió el recurso de alzada en el efecto suspensivo.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 422 del Código General del Proceso establece qué debe entenderse por título ejecutivo. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184."

2.2. En relación con los requisitos del título ejecutivo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC3298 de 2019 señaló lo siguiente:

"La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de

realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida”.

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al negar el mandamiento de pago, en razón a que, el documento presentado como base de recaudo carece de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para tenerlo como título ejecutivo, debido a que, la obligación allí contenida no es clara ni expresa.

Al respecto, esta dependencia judicial encuentra ajustado a derecho lo definido por el fallador de primera instancia, específicamente en cuanto al tema de la claridad y exigibilidad, acorde con lo cual se pasa a explicar por qué el documento presentado como título ejecutivo carece de tales requisitos. Pero antes, es de indicar que el *a quo* no acertó al requerir a la parte ejecutante para que vinculara a todas las personas que ostentaban la condición de acreedoras y que suscribieron el acta de conciliación aportada en el expediente, esto porque se está en presencia de una obligación divisible y singular, es decir, en el presente caso no existe solidaridad activa ni pasiva, pues en el presunto título ejecutivo no se expresó tal circunstancia, ni tampoco se configura alguna de las causales previstas en el ordenamiento jurídico para tenerse como una obligación solidaria. Motivo por el cual, no era dable exigir a la parte demandante vincular a todos los suscriptores del acta de conciliación (acreedores), en tanto, el proceso podía desarrollarse respecto de las personas que tenían intención de demandar, pues en el caso *sub judice* no existe litisconsortes necesarios. Ahora, es de indicar que tampoco asiste razón a la parte recurrente al señalar que la obligación que se pretende ejecutar es solidaria, pues como ya se dijo, en el acta de conciliación allegada no se dispuso la solidaridad respecto de los acreedores, ni tampoco se encuentra configurada alguna de las causales previstas en la ley para tal efecto.

Por otro lado, tampoco acertó el fallador de instancia al indicar que la parte demandante debió definir en el acta de conciliación la condición en la que actuaban los acreedores, pues si alguno de ellos actuaba en representación de otra persona, como es el caso de Lina María y Natalia Zapata Mejía, quienes presuntamente son herederas de Jaime Ramiro Zapata, así debió consignarse, lo anterior debido a que, tales circunstancias no configuran motivos para la

inadmisión o rechazo de la demanda ejecutiva, pues precisamente el escenario procesal para discutir tales aspectos sería en la respectiva contestación de la demanda.

De igual modo, tampoco es correcto exigir al extremo procesal activo determinar cuál es el monto adeudado a cada acreedor, pues en los eventos de obligaciones de pagar sumas de dinero, se tiene que salvo exista solidaridad, los acreedores solo podrán exigir el pago de la cuota o parte que les corresponde y esa cuota o parte será definida conforme con el número de acreedores que haya, a excepción de los casos en que se determine un valor distinto para cada acreedor, por lo tanto, en el presente caso, los acreedores podrían exigir el pago de la cuota o parte que les corresponde, la cual será el resultado de la división entre el monto total de la obligación y la cantidad de acreedores que haya. En la misma línea debe indicarse que no era correcto exigir a la parte ejecutante vincular a los presuntos herederos de Jaime Ramiro Zapata Hernández, pues estos tendrán las acciones pertinentes para hacer valer sus derechos.

Con todo, como ya se dijo, la decisión del juzgado de primer nivel debe ser confirmada y la razón de ello es que el documento aportado como base de recaudo carece de claridad y expresividad para poder ser ejecutado por esta vía, ello en virtud de que el acta de conciliación suscrita el 29 de junio de 2022, en su parte introductoria señala que: *"Los convocantes..., invitan a EL CONVOCADO: HERNÁN DARÍO VILLA RESTREPO, con el fin de fijar fecha de pago, de deuda contraída, por venta de lote, ubicado en la Calle 50 # 38-118, paraje El Tablazo, Municipio de Copacabana (Antq), el cual según promesa de compraventa, fechada el 26 de noviembre de 2016, ya que se debió haber cancelado en su totalidad el día 30 de abril de 2018. Monto de la deuda que asciende a \$838.503.503..., correspondientes a deuda, más intereses de mora pactados, más prediales de los años 2017-2018 y primer trimestre de 2019, todo esto liquidado a 15 de junio de 2022".* En las pretensiones del acta se consignó que: *"LOS CONVOCANTES: solicitan que les pague la deuda, que a hoy asciende a \$1.157.618.726... hasta el día de hoy, incluida la multa."* Y finalmente en el acápite de "ACUERDO", se indicó que: *"EL CONVOCADO: HERNÁN DARÍO VILLA RESTREPO, acepta el valor de la deuda total y propone que pagará el 05 de octubre de 2022, o antes si se puede, la suma de*

\$650.000.000 (seiscientos cincuenta millones) de pesos. El lugar de entrega será en la casa paterna, localizada en..."LOS CONVOCANTES: aceptan lo propuesto por EL CONVOCADO: HERNÁN DARIO VILLA RESTREPO, pero condicionado a la pérdida de estas rebajas, en caso de incumplimiento".

Así descrito lo acordado, este despacho coincide con el *a quo* en que el acta de conciliación presentada carece de claridad, debido a que, en la parte introductoria se habló de un valor total de la deuda de \$838'503.503, más intereses de mora pactados, prediales de 2017, 2018 y primer trimestre de 2019, empero, no se determinó los valores correspondientes a cada ítem; del mismo modo, en el acápite de pretensiones del acta de conciliación se dijo que lo adeudado era el valor de \$1.157'618.726, sin embargo, en el acuerdo se dispuso que el valor que pagaría el deudor sería \$650'000.000 el 5 de octubre de 2022; pero que, en caso de incumplimiento perdería el valor de las rebajas, y es en este punto en que se pierde toda claridad, la obligación deja de ser expresa y el título pierde el carácter ejecutivo, pues no es preciso en indicar en tal caso cuál es el valor total de la deuda y cuál es el valor de los conceptos rebajados, por lo tanto, mal podría el juzgador definir el monto que en tal circunstancia ese documento representa por medio de elucubraciones que lo lleven a inferir un supuesto valor adeudado, pues en el proceso ejecutivo tal proceder se encuentra proscrito.

En consecuencia, el auto de 3 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Envigado, será confirmado.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 3 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Envigado.

SEGUNDO. Sin condena en costas por cuanto no se causaron.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada